

A LA CAMARA DE DIPUTADOS:

La reforma del Código de Faltas provincial -(Ley N° 1123) actualmente en vigencia en nuestra provincia- constituye una necesidad, tendiendo la presente reforma como objetivo primordial que resulte compatible con las exigencias constitucionales y convencionales que un estado democrático de derecho requiere.

El código de faltas que hoy nos rige fue sancionado en el año 1988 y puesto en vigencia a partir del año 1991, es decir, previo a la reforma de la Constitución del año 1994; reforma en la cual se produjeron sustanciales cambios.

Este proyecto de ley se enmarca dentro de una aspiración general de reforma de todo el derecho sancionador de la Provincia de La Pampa, tratando de modernizar las estructuras procesales conforme al paradigma acusatorio adversarial impuesto desde la sanción del Código Procesal Penal de La Pampa (Ley N° 2287).

Este nuevo Código, recepta las exigencias constitucionales y convencionales actuales, siguiendo un procedimiento acusatorio en contraposición al procedimiento inquisitivo actual. El procedimiento actualmente vigente, le otorga al Juez la doble función de investigar y juzgar, circunstancia que, en la actualidad de los procesos constitucionales democráticos resultan incompatibles con dicho sistema político por la notoria confusión de roles que produce.

El Código Procesal Penal es la piedra angular del sistema sancionador, y servirá como norma integradora de toda situación no reglada o de dudosa interpretación. Más allá que el monitoreo que se desarrolló recientemente, aconsejen ajustes al sistema procesal pampeano ello no implica, abandonar el núcleo de instituciones básicas que sustentan el procedimiento, sino por el contrario profundizará tal idea.

En tal inteligencia, es razonable pretender una reforma integral del actual Código de Faltas. Abrevando en la doctrina y en el derecho público provincial, se advierten serias objeciones a aquellos ordenamientos que no adecúan su procedimiento a los nuevos paradigmas procesales. También está claro que todas las reformas, para lograr éxitos, exigen ser realizadas de una manera posible, es decir de forma tal que pueda instrumentarse con los recursos que el sistema actualmente provee.

Siguiendo un orden en la presente fundamentación, se propone el cambio de denominación del código, reemplazando la denominación Código de Faltas Provincial por Código Contravencional Provincial.

Dicho cambio de denominación es necesaria en tanto en nuestra provincia conviven los Códigos Municipales y Regionales de Faltas, dictados por los órganos legislativos locales –de neta aplicación administrativa- y el Código de Faltas Provincial sancionado por la Cámara de Diputados Provincial –de aplicación jurisdiccional- por lo que el cambio de denominación contribuirá a deslindar las cuestiones de competencia exclusiva y excluyente del ámbito jurisdiccional de las que corresponden al ámbito municipal (administrativo).

Se establece como regla general que, si surgiera la duda sobre la colisión de normas entre un Código de Faltas Municipal o Regional u Ordenanza Municipal y el código contravencional, se aplicará la norma municipal, atendiendo las autonomías

municipales, tanto en la tipificación de las conductas como en los funcionarios competentes para llevar adelante el procedimiento.

Ello no obsta que a través de este Código también el Juez Contravencional pueda imponer sanciones cuando el bien jurídico protegido sea otro y confluya junto al bien jurídico protegido por el Código de Faltas Municipal o Regional u Ordenanza Municipal.

Particularmente se puede plantear en las situaciones de espectáculos deportivos, expendios de bebidas alcohólicas, contaminación ambiental donde puede, el Juez Contravencional, sancionar la comisión de una determinada contravención, y el municipio, por su parte, podría sancionar, v.g. en el expendio de bebidas alcohólicas, con la inhabilitación, sin que ello implique doble punición, dado que las normas protegen ámbitos distintos.

Además, en esta acción conjunta de autoridades provinciales y locales, los Municipios van a contar con el auxilio legal de recurrir al Juez competente para requerir órdenes de registro y allanamiento para el cumplimiento de su poder de policía, además del auxilio de la fuerza pública provincial.

Se establece que toda contravención da lugar a una acción pública, a excepción de las contravenciones contra la integridad individual y las que, en el caso, establezca el Código o leyes especiales en la que el mismo se aplique, que serán de instancia privada.

Se amplía el catálogo de penas en relación al Código actual, estableciendo nuevas modalidades para sancionar al contraventor como la prohibición de acudir a determinados lugares, la caución de no ofender o la reparación del daño causado a favor de la víctima, entre otras. Estas alternativas que se incorporan resultan más armónicas a los nuevos paradigmas.

Al igual que en el Código Procesal Penal se regula el Criterio de oportunidad. Este principio posee buenas estadísticas en su similar Código Procesal Penal. A través del mismo, el Ministerio Público Fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción contravencional en los casos mencionados en el proyecto, siempre notificando de tal posibilidad a la víctima u ofendido. Una de las circunstancias en las que procederá este principio es cuando haya conciliación entre las partes y el imputado haya reparado en su totalidad el daño causado siempre que se trate de contravenciones con contenido patrimonial cometidas sin violencia física o intimidación sobre las personas.

También se regula como instituto la suspensión del proceso contravencional a prueba para aquel imputado que no registre condena contravencional en los cuatro años anteriores al hecho. En tal caso, se establece que durante el plazo de prueba se podrá imponer el deber de cumplir con condiciones relacionadas con la reparación del daño causado o a garantizar la no comisión de otras contravenciones. Asimismo, se le establecerán reglas de conducta que el juez estime conveniente, de acuerdo a la contravención cometida y a las que el código regula.

Se crea el Registro de Contraventores, cuya Autoridad de Aplicación será el Juzgado Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial. En el mismo se llevará un registro de las sentencias condenatorias y de las rebeldías dictadas por los Jueces Contravencionales o los que, a falta de éstos actúen, acorde las competencias dadas por el proyecto elevado. Así, cada Juez antes de dictar sentencia deberá requerir

al Registro información sobre la existencia de condenas y rebeldías del imputado. Los registros tendrán una duración temporal que se establece en 4 años contados a partir de la fecha de la condena y siempre que no haya cometido una nueva contravención.

Se establece que la competencia para la aplicación de Código de Faltas corresponde a los Jueces Contravencionales. Asimismo, y a fin de asegurar el acceso a los justiciables, donde no hubiere Juez Contravencional la función será cumplida por el Juez de Control o Juez Regional Letrado con competencia territorial en el lugar de comisión de los hechos.

A diferencia del código actual se establece la posibilidad de constitución de querellante particular que coadyuve al fiscal y que, eventualmente ante la reforma del CPP, ejerza acción privada autónoma ante el desinterés del acusador público

El juicio, que cuenta con un poder requirente (el Ministerio Público Fiscal) encargado de promover la acción contravencional, con asistencia letrada (la defensa técnica) obligatoria y con la intervención de un tercero imparcial e independiente al conflicto (el Juez) aseguran un debido proceso legal.

El juicio consiste en un proceso simplificado y caracterizado por la celeridad, la actuación, la oralidad, la informalidad y la inmediación

Se mantienen algunas de las contravenciones establecidas actualmente, en tanto que se incorporan otras, como por ejemplo el hostigamiento, situación que en la actualidad acontece y que no se encuentra regulado, taxativamente como una falta. Asimismo algunas denominadas faltas que resultan inadecuadas a la realidad actual son suprimidas.

Se mantienen las sanciones para los padres que sustraigan a los hijos de la educación obligatoria. Como es de vuestro conocimiento, a través de esta figura, el Juzgado Provincial de Faltas con asiento en Santa Rosa, en el año 2016, ha permitido la reescolarización de 161 menores, en tanto que en el Juzgado Provincial de Faltas con sede en General Pico, en el mismo período, se reescolarizaron 96 menores.

También se mantiene como contravención que los directores de establecimientos de enseñanza no denuncien el abandono o el descuido en la educación por parte de los padres, tutores o guardadores.

Asimismo, se incorpora como contravención la agresión verbal que pudiera sufrir en lugares públicos personal docente o no docente y/o médicos o integrantes de equipos de salud con motivo o en ocasión de los servicios que prestan en cualquier centro educativo o de salud de la Provincia.

Acorde al nuevo paradigma, se adapta la terminología en cuanto a los menores, refiriéndose en tal caso a los niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, se adecúa al sistema general de impugnación del Código Procesal Penal, estableciendo que la competencia de los jueces del Tribunal de Impugnación Penal será unipersonal para el tratamiento de los recursos.

Asimismo, se establece que el juez contravencional será Tribunal de Alzada de los jueces de faltas municipales o regionales.

El control en la ejecución de la pena contravencional, corresponde al juez contravencional en tanto que en lo que se refiere a la suspensión del juicio contravencional a prueba, el control corresponde al Ente de Políticas Socializadoras.

La aprobación del presente proyecto de ley, implicará la necesaria adecuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la compatibilización con las facultades municipales en materia de faltas.

Atento a los fundamentos precedente vertidos, se solicita a los Sres. Diputados el pronto tratamiento y aprobación de ese Cuerpo al presente Proyecto de ley.